



# Políticas públicas e inteligencia artificial: la disrupción del Sector Público

Por Edgar Alejandro Ruvalcaba Gómez

Es una realidad que la inteligencia artificial ya está controlando el mundo; para sustentar esta premisa, basta con ver lo que hacen las grandes compañías tecnológicas como Google, Facebook y Amazon. Estas empresas son las que tienen más consolidado el uso de técnicas de inteligencia artificial basadas en algoritmos y tienen el poder de rastrear, medir y analizar todo lo que haces (incluso lo que no haces) desde tu computadora, *smartphone* y otros dispositivos con conectividad. Al tener esa información saben lo que haces y lo que piensas, así que generan modelos algorítmicos para predecir lo que realizarás y lo que pensarás.

El poder de las técnicas de inteligencia artificial va más allá de influir en tu consumo comercial (qué coche o zapatos vas a comprar), sino que amenazan la democracia (por quién vas a votar, quién va a gobernar). Un ejemplo emblemático de cómo los algoritmos intervienen en la política es el caso de Cambridge Analytica, empresa que utilizó grandes cantidades de datos de redes sociales, como Facebook, para orientar y manipular las preferencias electorales en favor de determinados candidatos, eso fue (y posiblemente siga pasando) en diversos países, entre los que destaca Estados Unidos.

Ante un fenómeno de esta trascendencia, mucho valor se ha puesto sobre el impacto potencial y la ética en el uso de esta tecnología. Del mismo modo, el uso de técnicas de inteligencia artificial en el sector público también está siendo muy controvertido y analizado desde distintas

perspectivas: políticas, organizacionales, legales, éticas, económicas, sociales y culturales. En este sentido, es posible reconocer una serie de políticas que ya se están implementando desde los mismos gobiernos para eficientar y gestionar los asuntos públicos.

En el desarrollo de este último rubro encontramos acciones para detectar y anticipar automáticamente fraudes y pagos indebidos, así como para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión de programas, apoyar la seguridad de estrategias de vigilancia masiva, reconocimiento facial, algoritmos que pueden predecir delitos, accidentes de tráfico, etcétera. También se aplica en políticas enmarcadas en las *smart cities*, haciendo uso del análisis de *big data*, que son tecnologías de sensores e internet de las cosas. Estos son sólo algunos ejemplos de lo que ya están haciendo los algoritmos en el sector público.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mencionó que “el país que tenga el monopolio en el ámbito de la inteligencia artificial será dueño del mundo”, y en este sentido tenemos que reconocer que esta carrera por la implantación de inteligencia artificial desde el gobierno la va ganando China. Al no ser un país que se caracterice por su calidad democrática, China ha puesto en marcha múltiples políticas públicas basadas en inteligencia artificial asociadas a la gestión y control de sus sociedades y prácticas como el reconocimiento facial, la gestión de la movilidad y la prevención del delito, que ya han dado algunos resultados positivos y



Ilustración: Jisel Flores

prosperado pese al descontento de ciudadanos que consideran que sus derechos humanos son vulnerados.

El conjunto de acciones por parte de las administraciones públicas que desarrollan técnicas de inteligencia artificial ha dado lugar al concepto *gobernanza algorítmica*, el cual hace alusión a una nueva forma de ejercer el gobierno y control. La aplicación de algoritmos trae

asociados beneficios como la mejora del procesamiento de información, la sustitución de la fuerza de trabajo y la agilización de los procesos burocráticos; sin embargo, existen riesgos como la posibilidad de caer en una obediencia tecnológica y pérdida de control, el dominio y deslegitimación de la acción pública, ciberdelincuencia y violación de la privacidad.

De esta manera, las políticas públicas basadas en inteligencia artificial enfrentan retos como aceptación y confianza de parte de la sociedad en esta tecnología, sustitución de empleo, garantizar la privacidad y seguridad en los datos, desarrollo de un marco legal, así como los sesgos discriminatorios en función de raza, colectivos, recursos económicos, género, los cuales, de no resolverse, podrían atentar contra los derechos humanos. El gran reto es controlar la capacidad de sustitución de la inteligencia humana, máquinas que piensen autónomamente y superen al ser humano. Por último, es importante señalar que la inteligencia artificial es una tecnología y como tal no es buena ni mala, pero el uso que se le dé sí puede tener un gran impacto positivo o negativo en la humanidad. 🗣️



**Edgar Alejandro Ruvalcaba Gómez** es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara (udeg), en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUEA), adscrito al Departamento de Políticas Públicas. Es doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Su investigación está relacionada con gobierno abierto, transparencia, participación ciudadana, datos abiertos, gobierno digital, políticas anticorrupción, inteligencia artificial e innovación pública. Actualmente es coordinador de la Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA) en México y miembro del Sistema Nacional Investigadores (SNI).